

Medellín, 26 de Diciembre de 2024.

CO02VJ0163 – 2024_821900

Señores

Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartago

Email: j05pmcartago@cendoj.ramajudicial.gov.co

CARTAGO

Referencia: Respuesta Acción de Tutela promovida por el señor **Jaircinho Moncaleano Ballesteros** en contra de **LIBERTY SEGUROS S.A.** y donde se ordena vincular a **Protección S.A.**

Radicado: 2024-00373

Solicitud especial: Se solicita al juzgado remitir copia íntegra de la decisión judicial que se profiera en el presente asunto. En caso de ser posible puede ser enviada al correo electrónico institucional: accioneslegales@proteccion.com.co, lo anterior para poder ejercer un correcto control de legalidad sobre las providencias que remiten los juzgados a Protección S.A.

En mi calidad de representante legal judicial de la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.**, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que se anexa, dentro de la oportunidad legal establecida para el efecto, me permito suministrar la información solicitada en relación con los hechos que originaron la presente acción de tutela, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

Sea lo primero indicar que el señor **Jaircinho Moncaleano Ballesteros** quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No. 9773431 presenta afiliación al fondo de Pensiones Obligatorias Administrado por Protección S.A. desde 2 de Mayo de 2007 y con Fecha de Efectividad de la afiliación del 3 de Mayo de 2007 como Vinculación inicial al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Resáltese al juzgado que la acción constitucional de la referencia no cumple con las condiciones mínimas para su interposición y todas las consecuencias que de esta podrían derivarse contra mi representada Protección S.A., eso es, no cumple con los siguientes

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (054) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (051) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (052) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (055) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

elementos o requisitos de procedibilidad sine qua non para el ejercicio de dicha acción legal, por lo cual la misma debe tenerse por improcedente.

Improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse el requisito de Subsidiariedad.

La presente acción de tutela debe ser declarada **IMPROCEDENTE**, conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la cual prevé: “*Esta acción sólo procederá cuando el afectado **no disponga de otro medio de defensa judicial**, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable*” Así mismo el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, precisa que el amparo constitucional será improcedente, **cuando existan otros medios eficaces de defensa judicial** para resolver la situación particular en la que se encuentre la parte actora.

Al respecto, La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, presidida por la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, **mediante Sentencia T-503-19**, determinó que:

“Cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer un determinado asunto radicado bajo su competencia, dentro del marco estructural de la administración de justicia”.

Así mismo, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, presidida por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, en sentencia T-117 de 1992 había señalado que:

*“La tutela **no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustantivos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la acción de rescatar pleitos ya perdidos**, sino que tiene el propósito claro y definitivo, estricto y específico, que el propio artículo 86 de La Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la carta le reconoce”.***(Subrayas fuera de texto)**

Así las cosas, cabe señalar que el amparo constitucional **no es un mecanismo alternativo para lograr la protección de derechos**, sino un medio residual y subsidiario, **supeditado a la falta recursos o medios de defensa judicial** que permitan hacer valer las pretensiones del afectado, salvo que se utilice como mecanismo transitorio ante la presencia de un perjuicio irremediable, **el cual no se comprueba en caso de referencia.**

Quiere decir lo anterior que la tutela es un mecanismo subsidiario que debe ser utilizado sólo cuando los procedimientos legales resultan ineficaces o cuando no existen otros medios de defensa y en forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se demuestra en el caso de la referencia y puntualmente respecto a las pretensiones incoadas por el **señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros**, frente a lo cual el legislador ya ha previsto otras acciones legales específicas con el fin de que las personas soliciten el cumplimiento de sus derechos, acudiendo ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse el requisito de Perjuicio irremediable.

De acuerdo con los requisitos de procedibilidad de tutela descritos con detalle en la **Sentencia T - 641 de 2014 de La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional**, en el presente caso no se configuran los criterios para determinar la configuración de un perjuicio irremediable, pues el perjuicio en este tipo de casos debe ser:

- **Inminente o próximo a suceder.** Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
- El perjuicio ha de ser **grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo** para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica.
- **Deben requerirse medidas urgentes para superar el daño**, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso.
- **Las medidas de protección deben ser impostergables**, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.

En ese sentido ha manifestado también la jurisprudencia de la Corte Constitucional mediante sentencias **T-472 de 2017** y **C- 132 de 2018** lo siguiente:

También ha dicho la Corte que la ponderación del perjuicio irremediable debe consultar las particularidades del caso concreto, a fin de definir la falta de idoneidad del mecanismo judicial ordinario y analizar, frente a las condiciones personales del peticionario, la intensidad sobre la inminencia del perjuicio irremediable para determinar qué derechos fundamentales se encuentran vulnerados. Para ello la jurisprudencia constitucional ha dispuesto ciertos requisitos que deberá ser valorado por el juez en cada caso concreto:

(i) Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial protección;

- (ii) *El estado de salud del solicitante y su familia;*
- (iii) *Las condiciones económicas del peticionario;*
- (iv) *La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital.*
- (v) *El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial, tendiente a obtener la protección de sus derechos, y*
- (vi) *El interesado acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.*

Ahora bien, nótese que, según las sentencias **T -1619-00** y **T 579 -97** la Corte Constitucional ya había expresado que, **si no se comprueba una amenaza o vulneración, la acción de tutela debe ser declarada improcedente.** Lo que traduce en que la acción u omisión debe ser concreta respecto de amenaza o vulneración de derechos y debe recaer directamente en una persona, por lo que no es viable entonces por ejemplo llegar a alegar una afectación transitoria.

Aplicado lo anterior al caso concreto, se establece con claridad que la parte tutelante, no acredita, siquiera sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales presuntamente afectados.

RESPECTO DEL TRAMITE DE CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL

Pago de honorarios y calificación en Junta Regional - Contra Aseguradora – SOAT – Por accidente de tránsito y en búsqueda de indemnización.

Respecto de los hechos narrados por **el señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros** en la presente acción de tutela, relacionados con la situación presentada ante aseguradora **LIBERTY SEGUROS S.A.**, en relación con una presunta falta de pago de honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se emita el respectivo Dictamen **como requisito para acceder al amparo de indemnización por incapacidad permanente, contenido en la póliza del SOAT expedida por dicha aseguradora**, es preciso indicar que mi representada desconoce en su totalidad tales hechos, toda vez que esto se surtió ante la citada entidad y no ante Protección S.A. Por lo tanto, esta Administradora de pensiones no tiene conocimiento de las condiciones y circunstancias que rodearon la presentación de la presente acción de tutela.

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (054) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (051) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (052) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (055) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

Tráigase a colación en este punto lo estipulado en el DECRETO 056 DE 2015: "Por el cual se establecen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, por parte de la Subcuenta ECAT del Fosyga y de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT". Norma que fue integrada en el DECRETO 780 DE 2016, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Recuérdese entonces lo que indican los siguientes artículos del **DECRETO 780 DE 2016**, en atención a la indemnización por incapacidad permanente parcial que persigue de fondo el **señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros** por medio de las solicitudes que se encuentra elevando ante la aseguradora accionada en tutela de referencia **(Subrayas fuera de texto)**:

ARTÍCULO 2.6.1.4.2.6. Indemnización por incapacidad permanente. Es el valor a reconocer, por una única vez, a la víctima de un accidente de tránsito, de un evento catastrófico de origen natural, de un evento terrorista o de los que sean aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando como consecuencia de tales acontecimientos se produzca en ella la pérdida de su capacidad para desempeñarse laboralmente. (Art. 12 del Decreto 56 de 2015).

ARTÍCULO 2.6.1.4.2.7. Beneficiario y legitimado para reclamar. Se considerará beneficiario y legitimado para reclamar la indemnización por incapacidad permanente ante la Subcuenta ECAT del Fosyga o ante la entidad aseguradora autorizada para expedir el SOAT, según corresponda, la víctima de un accidente de tránsito, de un evento terrorista, de un evento catastrófico de origen natural o de otro evento aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fosyga, cuando por causa de dichos eventos, hubiere perdido la capacidad laboral en alguno de los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 2.6.1.4.2.8 del presente decreto, pérdida que deberá ser calificada por la autoridad competente. (Art. 13 del Decreto 56 de 2015).

ARTÍCULO 2.6.1.4.2.8. Responsable del pago y valor a reconocer. La indemnización por incapacidad permanente será cubierta por: ...a). La compañía de seguros cuando se trate de un accidente de tránsito en el que el vehículo involucrado esté amparado por una póliza de SOAT. (Art. 14 del Decreto 56 de 2015).

ARTÍCULO 2.6.1.4.2.9. Término para presentar la reclamación. La solicitud de indemnización por incapacidad permanente deberá presentarse en el siguiente

término: ...b). Ante la compañía aseguradora que corresponda, en los términos del artículo 1081 del Código de Comercio. (Art. 15 del Decreto 56 de 2015).

Ahora bien, resulta trascendental manifestar también al Despacho que, una vez revisados nuestros registros, no se encontró que **el señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros**, haya presentado ante Protección S.A. alguna **SOLICITUD FORMAL de prestación económica por invalidez y/o incapacidades**.

Adicionalmente, Protección S.A. tampoco ha sido notificada de algún concepto de rehabilitación por enfermedad o accidente de origen común, que haya sido emitido por la EPS con la cual tiene afiliación vigente el señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros, ni tampoco de algún dictamen de pérdida de capacidad laboral que se haga vinculante, por ende, mi representada desconoce en su totalidad su estado de salud.

Lo anterior evidencia que mi representada no se encuentra pendiente del reconocimiento de alguna prestación económica o de dar respuesta a algún derecho de petición que hubiese presentado la parte accionante, por lo tanto, si considera que le asiste algún derecho susceptible de reconocimiento por parte de esta entidad estamos prestos a recibir su solicitud y darle el trámite pertinente a la misma.

Así las cosas, si la parte hoy accionante considera pertinente efectuar reclamación económica alguna ante esta Administradora, es importante precisar al Despacho que es indispensable que reciba asesoría al respecto, **aporte la historia clínica actualizada, resultado de exámenes, concepto médico de rehabilitación e historial de las incapacidades, con el fin de que su caso sea evaluado y se determine la conducta a seguir.**

En este orden de ideas, esta Administradora para realizar el análisis de cualquier Prestación Económica, tiene establecido un procedimiento consistente en que el afiliado debe asesorarse en esta AFP, radicar el Formato de Solicitud de Prestación Económica y aportar todos los documentos solicitados (De lo contrario se tendrá por no solicitada la prestación) por el riesgo correspondiente, que en este caso sería invalidez, y posterior a la radicación del Formato de Solicitud de Prestación Económica por invalidez se pasa a la evaluación por un Médico de la Comisión Laboral contratada por Protección S.A. que indicará si tiene derecho o no al pago de incapacidades o si por el contrario, se procede a determinar la pérdida de la capacidad laboral. **El anterior procedimiento tiene como finalidad obtener una información completa y confiable sobre la evolución y situación actual de los afiliados.**

Como puede observarse Protección S.A. no ha vulnerado derecho fundamental alguno en el caso de referencia, **toda vez que como se ha indicado, hasta la fecha no se ha elevado petición formal relacionada con el pago de alguna prestación económica en favor del señor** y las Administradoras de Fondos de Pensiones como lo es Protección S.A., solo son responsables de las prestaciones económicas que se deriven de las contingencias de invalidez,

vejez y muerte, pero **de origen común**, más no profesional, tal como se desprende de lo previsto en los artículos 10 y 13 de la Ley 100 de 1993.

Igualmente, debe ponerse de presente al Despacho y el señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros que el **artículo 7° del Decreto 510 de 2003** señala que la obligación de reconocimiento de las prestaciones económicas por parte de los fondos procederá siempre y cuando se radique la respectiva solicitud de reconocimiento, junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, **lo cual no ha ocurrido. Indica la norma:**

“Artículo 7°. Para los efectos del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, la obligación de los fondos encargados de reconocer la pensión, dentro del término legal establecido, procederá una vez se presente la solicitud de reconocimiento junto con la documentación requerida para acreditar el derecho, a través de la cual se prueben los presupuestos de hecho y de derecho de la norma que confiere la respectiva prestación de vejez, de invalidez o de sobrevivientes.”

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

Tal como lo advierte **el señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros** en su escrito de tutela, la presunta vulneración de derechos fundamentales se le atribuye a **LIBERTY SEGUROS S.A.** en relación con una presunta falta de pago de los honorarios a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se emita el respectivo Dictamen como requisito para acceder al amparo de indemnización por incapacidad permanente, contenido en la póliza del SOAT expedida por dicha aseguradora, y esta Administradora Protección S.A. **desconoce la veracidad de las situaciones narradas** y conforme a las cuales la parte accionante conserva las siguientes pretensiones:

PETICIONES

Por lo anteriormente expuesto le solicito a su Señoría de la forma más atenta y respetuosa:

Primero. Tutele mis derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la seguridad social

Segundo. Sírvase su señoría para que en el Término perentorio de 48 horas a partir de la notificación del fallo de tutela me sea remitida a valoración de pérdida de capacidad laboral, con el fin de saber mi porcentaje de pérdida laboral a cargo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) póliza que pertenece a la compañía de seguros **LIBERTY SEGUROS S.A.**

Medellín: Cl. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (054) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (051) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cl. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (052) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (055) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

Quiere decir lo anterior, que en lo que respecta a esta Administradora de pensiones no existe “causa petendi” como se ha establecido por parte de la Corte Constitucional en sentencia T - 162 de 1998 así:

“La causa petendi contiene, por una parte, un componente físico constituido por una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente calificados de los cuales se busca extraer una consecuencia jurídica. “

Así, no es clara la legitimación en causa por pasiva frente a Protección S.A. dentro de la presente acción de tutela, como lo indico también la **Corte Constitucional en sentencia T - 416 de 1997.**

“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan.”

Por lo anterior, no es posible que el Juez de tutela se pronuncie frente a **pretensiones no esgrimidas en contra de esta Administradora**, sino que por el contrario el fallo debe involucrar únicamente las relaciones entre accionante y aseguradora.

De acuerdo con todo lo expuesto, respetuosamente consideramos que **la presente acción debe ser denegada por improcedente y por carencia de objeto en lo que respecta a Protección S.A.** Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia T - 555 de 2015, señaló:

El fenómeno de la carencia actual de objeto:

La Corte ha descrito la carencia actual de objeto como el fenómeno que se produce cuando se extinguen los supuestos en los que se basa la violación de

derechos que se ventila en el trámite de tutela, ante lo cual carecería de efecto una decisión del juez constitucional dirigida a hacer cesar aquellas conductas de las que se derivaba la afectación en la que se sustentó la acción.

Por considerarlo pertinente, se trae también a colación in extenso, los argumentos sentados por esta Sala de revisión en la **sentencia T-867 de 2013**, en donde respecto al fenómeno de carencia actual de objeto, expuso lo siguiente:

“(…) la acción de tutela se instituyó como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por tanto, esta Corporación ha sostenido en reiterada jurisprudencia, que ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier decisión que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua, y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de ‘carencia actual de objeto’, el cual se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse ya sea a través de la figura denominada ‘hecho superado’, o ‘daño consumado’.

“La primera de estas dos figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo, y el fallo, se ven completamente satisfechas las pretensiones esbozadas por el actor; esto es, que durante el trámite del proceso de tutela, cesa la vulneración de las garantías fundamentales objeto de discusión, y por tanto la acción pierde su fundamento, haciendo imposible que el juez constitucional imparta una determinada directriz que impida la ocurrencia de un daño que actualmente no tiene vocación de existencia. (...)”

MARCO NORMATIVO

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD:

- Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 – Derecho a la acción de tutela.
- Numeral 1º del Artículo 6º del Decreto 2591 de 1991- Subsidiariedad de la acción de tutela.

Medellín: Cll. 49 No. 63 - 100 Medellín Torre Protección. Tel: (054) 230 7500 * Bogotá: Transv. 23 N. 97 - 73 piso 5 Edificio City Business. Tel: (051) 601 2525 - 601 3535 * Cali: Cll. 64 Norte No. 5B - 146 Centro Empresarial Local 47. Tel: (052) 608 0086 * Barranquilla: Cra. 52 No. 76 - 167 C.C. Atlantic Center Oficina 504 Locales 113 y 114. Tel: (055) 360 8929

www.proteccion.com * Línea de servicio Nacional 01 8000 52 8000 * NIT. 800.138.188-1

- Sentencia T-503-19 - Corte Constitucional - Subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela.
- Sentencia T-117 de 1999 - Corte Constitucional-
- Sentencias T-472 de 2017 y C- 132 de 2018 de la Corte Constitucional- Perjuicio irremediable.
- Sentencia T - 641 de 2014 - Corte Constitucional - Perjuicio irremediable
- Sentencias T -1619-00 y T 579 -97 - Corte Constitucional- Necesidad de prueba de amenaza o vulneración de derechos.
- Sentencia T-291 de 2017- Corte Constitucional -Inmediatez.
- Sentencias SU027-21 y T-291-21 - Corte Constitucional -Temeridad.
- Artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991- Temeridad.
- Sentencia T-114 de 2013, Corte Constitucional – Conflicto económico.
- Artículo 100 del Código General del Proceso Ley 1564 de 2012, numeral 8 – Pleito pendiente.
- SU173-15 de Corte Constitucional - Legitimación en la causa por activa.
- Sentencia 2013-00271-01 -Consejo de Estado - Legitimación en la causa por pasiva.

CALIFICACION:

- Artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Artículo 52 de la Ley 962 de 2005 y que a su vez fue modificado por el Artículo 142 del Decreto 019 de 2012- Calificación del estado de invalidez- Metodología para la determinación del grado en una clase de deficiencia – mejoría medica máxima.
- Decreto 1507 del 2014 - Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.
- Decreto 1072 de 2015- Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo - Compilatorio del Decreto 1352 de 2013 -Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras disposiciones.
- Artículo 44 de la Ley 100 de 1993 – Revisión del estado de invalidez.
- Decreto 1333 de 2018 - Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones.
- Sentencia C-120 de 2020 - Corte Constitucional - Calificación del estado de invalidez - Exequibilidad del segundo inciso del Artículo 142 del Decreto Ley 019 de 2012.
- Sentencia de Unificación 313 de 2020 - Corte Constitucional – Entidad responsable de reconocimiento pensional cuando existe controversia por traslados posteriores a la estructuración de la invalidez.
- Sentencia C-425 de 2005 - Corte Constitucional - Valoración integral de pérdida de capacidad laboral, inclusión de diagnósticos de origen común y laboral.
- Sentencia de Unificación 588 de 2016 - Sala Plena de la Corte Constitucional - Requisitos para validez y firmeza de dictamen de pérdida de capacidad laboral.

- Artículo 2 del Decreto 1352 de 2013 compilado por el Artículo 2.2.5.1.2. del Decreto 1072 de 2015- Notificación dictamen partes interesadas.
- Sentencia T-774 del 28 de diciembre de 2015 - Corte Constitucional - Grado mínimo de diligencia.
- Artículo 43 del Decreto 1352 de 2013, compilado por el Artículo 2.5.1.41. del Decreto 1072 de 2015 (Recurso contra dictamen).
- Artículo 30 del Decreto 1352 de 2013, compilado por el Artículo 2.2.5.1.28. del Decreto 1072 de 2015. Requisitos mínimos que debe contener el expediente para solicitar la calificación ante las Juntas de Calificación.
- Artículo 34 del Decreto 1352 de 2013, compilado por el Artículo 2.2.5.1.32 del Decreto 1072 de 2015. Pago de gastos de traslado, valoraciones por especialistas y exámenes complementarios.
- Artículo 44 del Decreto 1352 de 2013, compilado en el Artículo 2.5.1.42 del Decreto 1072 de 2015. Controversias sobre los dictámenes de las Juntas de Calificación de Invalidez.
- Artículo 29 del Decreto 1352 de 2013, compilado por el 2.2.5.1.25. del Decreto 1072 de 2015. Casos en los cuales se puede recurrir directamente ante las juntas regionales de calificación de invalidez.
- Artículo 2.2.3.3.2 del Decreto 1333 de 2018 - Concepto desfavorable de rehabilitación inicia trámite de calificación de Invalidez.
- SU588 de 2016 de la sala Plena de la Corte Constitucional. Requisitos para adquirir el dictamen de pérdida de capacidad laboral validez y firmeza, como para hacerse exigible.
- Corte Constitucional a través de Sentencia T – 476 de 2002 - Obligación por parte del último empleador del afiliado pensionado de reintegrarlo a la fuerza laboral en caso de que el estatus de invalidez deje de estar presente.
- Sentencia T-185 de 2018- Corte Constitucional - Exigencia de sentencia de interdicción para incluir en nómina de pensionados a persona en situación de discapacidad mental-Subreglas.
- Sentencia T-495 de diciembre 2018 de 2018 Corte Constitucional y Ley 1696 de 2019- Prohibición de solicitud de interdicción frente a personas con discapacidad para trámites pensionales.
- Artículo 10 de la Ley 100 de 1993 y Circular Conjunta 001 de 2005 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por el Ministerio de la Protección Social – Prohibición de doble prestación económica por parte del Sistema, ya que se adquirió la prestación económica a que tuvo derecho.
- Artículo 5 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 – Incapacidades de origen laboral.
- Artículo 3 de la Ley 776 de 2002 - Incapacidades de origen laboral.
- Artículo 7 del Decreto 1295 de 1994 - Accidente de trabajo o enfermedad profesional.
- Artículo 7 del Decreto 510 de 2003 – Necesidad de solicitud formal para reconocimiento y pago de prestaciones económicas - compilado en Artículo 2.8.1.1 del Decreto 1833 de 2016.

- Artículo 17 de la Ley 1755 – Peticiones incompletas y desistimiento tácito.

CONSIDERACIONES

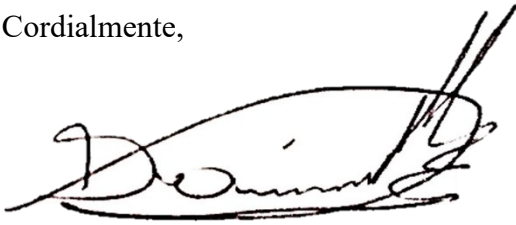
De acuerdo con lo anterior, esta Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ha obrado de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, razón por la cual no observa conducta alguna que constituya o se erija en la violación de algún derecho fundamental o legal **del señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros**.

Esperamos de esta manera haber aclarado la situación del señor Jaircinho Moncaleano Ballesteros, no obstante, permanecemos a disposición de ese Despacho para lo que se estime pertinente. En caso de requerir información adicional o notificar algún tipo de providencia puede llevarse a cabo a través del correo electrónico institucional: **accioneslegales@proteccion.com.co**

ANEXOS

- Certificado de existencia y representación legal.

Cordialmente,



Daniel Giraldo Giraldo
Representante Legal Judicial
Protección S.A.
Lla